

**EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE CASILDA
-RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- s/ QUEJA POR DENEGACION DEL
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD**

Cita: 405/20

Nº Saij:

Nº expediente:

Año de causa: 0

Nº de tomo: 298

Pág. de inicio: 286

Pág. de fin: 290

Fecha del fallo: 03/06/2020

Juzgado: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (Santa Fe) - Santa Fe

Jueces

Daniel Aníbal ERBETTA

María Angélica GASTALDI

Rafael Francisco GUTIERREZ

Eduardo Guillermo SPULER

Jurisprudencia relacionada

EMBOTELLADORA DEL ATLANTICO S.A. c/ MUNICIPALIDAD DE CASILDA -RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- s/
QUEJA POR DENEGACION DEL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD /// CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; 19/06/2018; Fuente
Propia; ; 385/18

Tesouro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > QUEJA > INADMISIBILIDAD

Tesouro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > REQUISITOS PROPIOS > CUESTION NO
CONSTITUCIONAL > SENTENCIA SUFICIENTEMENTE FUNDADA

Tesouro > SENTENCIA > FUNDAMENTOS SUFICIENTES

Tesouro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > QUEJA > MERA DISCREPANCIA

Tesouro > TRIBUTO > DETERMINACION

Tesouro > CADUCIDAD DE INSTANCIA

Tesouro > PAGO > REPETICION

CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - TRIBUTARIO

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUEJA. INADMISIBILIDAD. SENTENCIA
SUFICIENTEMENTE FUNDADA. MERA DISCREPANCIA. TRIBUTO. DETERMINACION.
CADUCIDAD DE INSTANCIA. ACCION DE REPETICION.

El presente recurso no puede prosperar, habida cuenta que a pesar del esfuerzo desplegado, la recurrente no logra desvirtuar los fundamentos del auto denegatorio, en que los Sentenciantes entendieron que el planteo de la actora que considera denegado su derecho de acceso a la jurisdicción no resulta atendible por cuanto la acción de repetición promovida tiene por objeto la devolución de la suma abonada por su parte en cumplimiento del requisito previo establecido por el artículo 8 de la ley 11330 y la quejosa debió hacerse cargo de que la causa en la que pretendió discutir el acto de determinación de los tributos exigidos concluyó

por inactividad procesal, lo que así fue declarado por el Tribunal y posteriormente por esta Corte, encontrándose por lo tanto firme la determinación, no resultando admisible una nueva impugnación. -
REFERENCIAS NORMATIVAS: Ley 11330, artículo 8.

Tesouro > RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD > QUEJA > INADMISIBILIDAD

Tesouro > PAGO > REPETICION

Tesouro > RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LEY 11330 > CADUCIDAD

CONSTITUCIONAL - PROCESAL - ADMINISTRATIVO

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUEJA. INADMISIBILIDAD. ACCION DE REPETICION.
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LEY 11330. CADUCIDAD

De la lectura del memorial recursivo en confrontación con los antecedentes del caso, se evidencia que en su pretendida repetición de lo pagado en verdad sólo reedita las mismas alegaciones de ilegitimidad postuladas al cuestionar la decisión administrativa al interponer el originario recurso contencioso administrativo que concluyera con la caducidad de instancia y por ende con la firmeza de los actos cuestionados, sin que se adviertan otras motivaciones que las entabladas en aquella oportunidad, por lo que debe rechazarse la presente queja. (Del voto de los Dres. Gastaldi y Erbetta) - CITAS: CSJStaFe: AyS T 200, p 203.

Texto del fallo

Reg.: A y S t 298 p 286/290.

Santa Fe, 3 de junio del año 2020.

VISTA: La queja por denegación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la actora contra la resolución número 294 de fecha 19 de junio de 2019, dictada por la Cámara de lo Contencioso Administrativo N° 2 de la ciudad de Rosario, en los autos caratulados "EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A. contra MUNICIPALIDAD DE CASILDA -Recurso Contencioso Administrativo- (Expte. N° 201/18 - CUIJ 21-17455654-4)" (Expte. C.S.J. CUIJ N° 21-00512753-7); y,

CONSIDERANDO:

1. Surge de las constancias de autos que Embotelladora del Atlántico S.A. interpuso, ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Rosario, demanda de repetición contra la Municipalidad de Casilda por la suma de \$50.580 -más los intereses que se devenguen hasta la fecha de su efectivo pago- correspondientes a los Derechos de Publicidad y Propaganda y/o Derechos de Ocupación o Uso del Espacio Público por los períodos fiscales 2007 a 2010 abonados "indebidamente" en concepto de pago previo del capital -según lo exige el artículo 8 de la ley 11.330- en el marco del expediente nro. 203/14; como así también se declare la inconstitucionalidad de los artículos 35, 51 y 52 inc. b) del Código Tributario

Municipal.

Por auto de fecha 20 de marzo de 2019 la Presidencia del Tribunal declaró inadmisibile el recurso interpuesto. Para así decidir sostuvo que "la recurrente dedujo el 18.9.14 recurso contencioso administrativo contra la Municipalidad de Casilda tendiente a que se declare la nulidad del Decreto del Intendente Municipal N° 1333 por el que rechazó el recurso de reconsideración interpuesto contra el Decreto N° 537 que a su turno determinó de oficio los Derechos de Publicidad y Propaganda por los períodos 2007 a 2010 por la suma de \$50.580 de capital histórico (Autos: Embotelladora del Atlántico S.A. c. Municipalidad de Casilda s. Recurso Contencioso Administrativo", Expte. 203/2014).

Luego en dichos obrados, por Auto N° 370 del 2.8.16 se declaró la caducidad de instancia, interponiendo contra el mismo la recurrente recurso de inconstitucionalidad, el que fuere rechazado mediante Auto N° 28 del 14.2.2017. Deducido que fuere el recurso de Queja ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Provincia, la misma es rechazada el 19.6.18.

Que las constancias reseñadas permiten concluir que en el presente caso se ha configurado uno de los supuestos que la normativa aplicable -ya analizada- contempla como obstativos para el progreso de la repetición de los importes abonados por la accionante.

Es que, habiendo deducido recurso administrativo contra un acto (Decreto N° 1333/14) que dispuso una denegación expresa del derecho postulado por el recurrente, la caducidad declarada importa que el acto impugnado ha quedado firme y consentido, no resultando admisible una nueva impugnación" (fs. 6/10).

Contra dicha resolución la recurrente interpuso recurso de revocatoria. Por auto nro. 294 (19.6.2019) el Tribunal rechazó el recurso deducido compartiendo los fundamentos y la consecuente decisión a la que arribara la Presidencia al declarar inadmisibile el recurso contencioso administrativo interpuesto.

Sostuvo además que "estando reconocido por la incidentista que la determinación de oficio se encuentra firme, se verifica de modo manifiesto configurado uno de los supuestos que la normativa aplicable al caso contempla como obstativos a la admisión de la repetición de los importes abonados en concepto del gravamen adeudado, en cumplimiento del requisito impositivo establecido por el art. 8 de la ley 11.330. Máxime, cuando tampoco puede válidamente soslayarse que conforme lo ha reconocido el mismo recurrente las sumas que pretende repetir no provienen de un pago indebido sino de un imperativo legal, esto es el cumplimiento del "requisito impositivo" (fs. 12/15).

Contra dicha decisión interpuso la perdidosa recurso de inconstitucionalidad fundando el

mismo en el artículo 1ro, inciso 3ro de la ley 7055 por causarle la sentencia definitiva un gravamen irreparable en su derecho de propiedad, defensa y acceso a una tutela judicial efectiva (fs. 17/25).

Al momento de explayarse sobre los agravios constitucionales en los que fundamenta su escrito, postula en primer lugar, que el Tribunal erró en la interpretación de la normativa municipal al resolver en base a que la determinación de oficio se encuentra firme debido a la caducidad decretada en el expediente 203/14 y que el pago realizado lo fue en virtud del "requisito impositivo" que establece el artículo 8 de la ley 11.330.

Explica en este sentido, luego de una interpretación de los artículos 58 y 59 del CTM, que el recurso interpuesto constituye un procedimiento completamente diferente a la petición de anulación del decreto municipal, de tal modo que dicho proceso en nada puede afectar el inicio de este nuevo cuyo objeto es la repetición de un tributo cuya causa dejó de ser la determinación del mismo y pasó a ser su "pago sin causa".

En la misma sintonía se agravia de lo dicho por la Cámara en cuanto a que el pago efectuado lo es en cumplimiento de un imperativo legal -art. 8 ley 11.330-, y no, como lo sostiene, en concepto de Derecho de Publicidad y Propaganda para poder ejercer su derecho de defensa en sede judicial "como condición imperativa para admitir el recurso contencioso administrativo ante la Cámara", bajo protesta y con reserva de repetir una vez finalizado dicho proceso, y por lo tanto es indebido o sin causa.

También considera errónea la aplicación del precedente "Peters Hermanos" por cuanto no se vincula con la presente causa porque -a diferencia de lo sucedido en el precedente citado- no se suscribió un convenio de pago con la Municipalidad, no se inició acción de repetición en sede administrativa, y que en aquella se declaró la admisibilidad del recurso y se aportó prueba.

Critica por otra parte que el A quo, al rechazar el recurso contencioso administrativo, omitió expedirse sobre la cuestión de competencia y demás requisitos de admisibilidad según lo recepta el artículo 12 de la ley 11.330. Entiende que es competente en virtud del artículo 58 del CTM, y que para evitar un conflicto de competencia con el fuero ordinario -teniendo en cuenta lo normado por el art. 59 del CTM y el artículo 5 inc. j) del C.P.C.C.-, decidió interponer la demanda de repetición directamente ante la Cámara de lo Contencioso Administrativo.

En cuanto a la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 51 y 52 inc. b) del CTM, dice que la devolución de las sumas abonadas junto con los intereses aplicando la tasa de interés

mensual del 0,5% que establece el CTM resulta irrazonable y confiscatoria por afectar una porción legítima de su derecho de propiedad.

En definitiva le achaca a la sentencia impugnada ser arbitraria por carecer de fundamentación razonada, interpretar y aplicar erróneamente la normativa y la jurisprudencia del alto Tribunal nacional y omitir pronunciarse sobre los requisitos de admisibilidad, violando su derecho de defensa y al debido proceso, implicando una disminución ilegítima de su patrimonio que redunde en un enriquecimiento ilícito del fisco municipal.

2. La Cámara -por auto nro. 425 de fecha 5.9.2019- denegó la concesión del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por entender -en síntesis- que los agravios esgrimidos revelaban la mera disconformidad de la impugnante con la conclusión a la que arribó el Tribunal luego de verificar la concurrencia de los recaudos de admisibilidad formal del recurso interpuesto, a la luz de los principios y las normas que rigen el ordenamiento público local y la jurisprudencia aplicable al caso (fs. 27/31v.).

3. Dicha denegatoria motivó la presentación directa de la recurrente ante esta Corte (fs. 34/46).

4. Entrando a analizar la queja deducida ante este Cuerpo, debe adelantarse que el mismo no puede prosperar habida cuenta que, conforme la ley que regula el recurso de inconstitucionalidad en el ámbito local, es carga del quejoso rebatir los fundamentos del auto denegatorio (art. 8, ley 7055) y se observa que si bien la recurrente se hace cargo de ellos en su presentación directa, lo hace sin lograr desvirtuarlos, a pesar del esfuerzo desplegado.

En efecto, tal como lo sostiene el A quo en la oportunidad prevista en el artículo 6 de la ley 7055, de la lectura del escrito impugnatorio surge suficientemente claro que las causales de arbitrariedad articuladas en abstracto no guardan conexión con la realidad del caso, reeditando la recurrente en esta instancia excepcional los agravios ya articulados en oportunidad de radicar el recurso de revocatoria deducido contra el auto de Presidencia impugnado, evidenciando su mera disconformidad con la conclusión a la que arribó el Tribunal.

Entendieron los Sentenciantes que el planteo de la actora que considera denegado su derecho de acceso a la jurisdicción no resulta atendible por cuanto la presente acción de repetición "tiene por objeto la devolución de la suma abonada por su parte en cumplimiento de lo ordenado por esta Cámara en autos "Embotelladora del Atlántico S.A. c/ Municipalidad de Casilda s/ Recurso Contencioso Administrativo", Expte. 203/2014, en cumplimiento del requisito previo establecido por el artículo 8 de la ley 11.330".

Observó, además, que la quejosa debió hacerse "cargo de que la causa en la que pretendió

discutir el acto de determinación de los tributos exigidos, fue iniciada mediante el Expte. N° 203/14 y concluida por inactividad procesal, lo que así fue declarado por este Tribunal, y posteriormente confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia".

En relación al agravio referido a la errónea interpretación de la normativa municipal aplicable señaló que no que alcanza para desvirtuar lo señalado por la Cámara y la C.S.J provincial respecto del último párrafo del art. 58 del CTM en cuanto establece que "quedan excluidas de la posibilidad de repetición en sede administrativa las deudas determinadas mediante un procedimiento que concluye en el dictado de una resolución que adquiere firmeza".

Consecuencia de lo expuesto es que el Tribunal A quo haya concluido afirmando que estando reconocido por la propia incidentista que la determinación se encontraba firme "no se observa por qué razón en el caso, no se configuraría el supuesto previsto en la norma aplicable como obstativo a la admisión de la repetición de los importes abonados en concepto de gravamen", no pudiendo el Órgano soslayar lo reseñado por la Presidencia en cuanto a que "la caducidad declarada importa que el acto impugnado ha quedado firme y consentido, no resultando admisible una nueva impugnación".

Frente a ello la impugnante trae sobre el tema argumentos en los cuales funda su particular y propia posición, sin lograr desvirtuar -como se expresara ut supra- los fundamentos expuestos en el auto denegatorio.

En efecto, insiste en esta Sede que el presente recurso contencioso administrativo es "un procedimiento completamente diferente a la petición de anulación de un decreto municipal"; y que la declaración de caducidad es "meramente formal" ya que nunca hubo sentencia de fondo, por lo cual dicha firmeza no puede implicar que no pueda reclamar la suma abonada mediante la acción de repetición reeditando, tal como lo sostiene la Cámara, los agravios esgrimidos en la revocatoria deducida.

Tampoco tiene éxito su planteo referido al supuesto enriquecimiento sin causa de la Administración. En este aspecto sostuvo la Cámara que el mismo responde al requisito previsto en el artículo 8 de la ley 11.330, situación que fuera reconocida por la recurrente al sostener que tuvo que abonar dichas sumas para poder ejercer su derecho de defensa en sede judicial.

De tal manera que el incumplimiento por la recurrente de lo establecido en el artículo 8 de la ley 7055, sella la suerte adversa del remedio deducido.

Por ello, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia RESUELVE: Rechazar la queja interpuesta. Declarar perdido para el recurrente el depósito efectuado.

Regístrese, hágase saber y oportunamente remítanse copias al Tribunal de origen.

Fdo.: GUTIÉRREZ- ERBETTA (por su voto)- GASTALDI (por su voto)- SPULER-
FERNÁNDEZ RIESTRÁ (Secretaria)

VOTO DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA GASTALDI Y EL SEÑOR MINISTRO DOCTOR ERBETTA:

Coincidimos sustancialmente con los fundamentos y la solución propuesta por los señores Ministros por cuanto de la lectura del memorial recursivo en confrontación con los antecedentes del caso, bien se evidencia que en su pretendida repetición de lo pagado en verdad sólo reedita las mismas alegaciones de ilegitimidad postuladas al cuestionar la decisión administrativa al interponer el originario recurso contencioso administrativo que concluyera con la caducidad de instancia y por ende con la firmeza de los actos cuestionados (A. y S. T. 200, pág. 203). No advirtiéndose otras motivaciones que las entabladas en aquella oportunidad, consideramos que debe rechazarse la presente queja.

Fdo.: ERBETTA- GASTALDI- FERNÁNDEZ RIESTRÁ (Secretaria)

Tribunal de Origen: Cámara de lo Contencioso Administrativo N°2, Rosario.

REFERENCIAS:

Ministro Firmante: 3/06/2020 10:36:20 DR. SPULER

Ministro Firmante: 3/06/2020 11.11.24 DR. GUTIÉRREZ (PTE.)

Ministro Firmante: 3/06/2020 11:36:16 DR. ERBETTA

Ministra Firmante: 3/06/2020 12:07:21 DRA. GASTALDI

Ministro Firmante: 3/06/2020 12.55.08 DR. FALISTOCCO

Secretaria Firmante: 3/06/2020 13.43:31 DRA. FERNÁNDEZ RIESTRÁ

Se deja constancia que el presente acto jurisdiccional fue firmado por el señor Ministro Presidente; los señores Ministros; y por quien suscribe, en la fecha y hora indicada en el sistema informático del Poder Judicial de la Provincia, en forma digital (Ley Nacional 25506; Decreto Reglamentario 2628/02; Ley Provincial 12491 y Acordada CSJSF n° 42 punto 3 de fecha 11/10/06), en el marco de la emergencia sanitaria producida por la pandemia Coronavirus - Covid 19 (Ley Nacional 27451, art. 1; Decretos de Necesidad y Urgencia del

Poder Ejecutivo Nacional 260/20; 297/20; 325/20; 355/20; 408/20; 459/20 y 493/20 y Acordadas CSJSF de fecha 16/03/20 - Acta 8; 19/03/20 - Acta 10; Resolución n° 306 de fecha 27/03/20; Acordada de fecha 14/04/20 - Acta 11; Resolución n° 370 de fecha 29/04/20; Acordada de fecha 13/05/20 - Acta 14 y Acordada de fecha 27/05/20 - Acta 15. Santa Fe, 3 de junio de 2020. FDO.: FERNÁNDEZ Riestra (SECRETARIA)